

Boletín



Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.

Se suscribe en esta capital, Imprenta de D. Francisco Paz, Fuente del Rey núm. 18.

En las demás provincias, en las principales librerías.

Precio de suscripción, en Orense, por trimestre, 2 rs. 50 céntimos.

—Para fuera de esta capital, franco de porte por trimestres adelantados, 3 rs. 50 céntimos.

—Números sueltos, 150 MILÉSIMAS.

REGENCIA DEL REINO.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

DECRETO.

Conformándose con lo propuesto por el Ministro de la Gobernación, como Regente del Reino,

Vengo en aprobar el siguiente reglamento para la ejecución de la ley de 25 de febrero último sobre ingresos provinciales y municipales, formado con arreglo a la disposición general de la misma.

Dado en Madrid a 20 de abril de 1870.—Francisco Serrano.—El Ministro de la Gobernación, Nicolás María Rivero.

REGLAMENTO

PARA LA APLICACION DE LA LEY DE 25 DE FEBRERO DE 1870, DICTADA EN CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN LA DISPOSICION GENERAL DE LA MISMA.

CAPITULO PRIMERO.

Formacion del presupuesto municipal.

Artículo 1.º La Comisión de presupuestos de cada Ayuntamiento redactará con la debida anticipación el proyecto de presupuestos para cada año económico.

Art. 2.º A este proyecto acompañará una nota o Memoria explicativa de las diferencias que existan entre el mismo y el presupuesto del año anterior. En ella se harán constar también los cálculos que han servido de base a la designación de los ingresos, exponiéndose las razones que se hubieren tenido presentes para admitir en el modo y forma que se establezca cada clase de recursos.

Art. 3.º Siempre que la Comisión de presupuestos proponga el impuesto de consumos, justificará en la Memoria la imposibilidad de cubrir los gastos del Municipio con los recursos autorizados en los párrafos primero, segundo y tercero del art. 2.º de la ley, o que no siendo suficientes los recursos a que se refieren los párrafos primero y segundo ofrecerá graves dificultades establecer el repartimiento general.

Art. 4.º El proyecto pasará a la censura del Síndico encargado de la parte económica.

Art. 5.º El proyecto se someterá

después a la aprobación del Ayuntamiento, si este le altera, se dejará consignada en la Memoria explicativa el proyecto de la Comisión a fin de que pueda ser apreciado en su día por la Junta municipal.

Art. 6.º Aprobado el presupuesto se expondrá al público en la Secretaría del Ayuntamiento por espacio de 15 días, lo cual se anunciará previamente por edictos y pregones, y en el Boletín oficial de la provincia si se trata de la capital de la misma.

Art. 7.º Espirado el plazo del artículo anterior, se convocará la Junta municipal compuesta del Ayuntamiento y asociados, la cual fijará definitivamente el presupuesto.

CAPITULO II.

De las Secciones y de la Junta municipal.

Art. 8.º En la formación de las secciones que determina el art. 15 de la ley, los Ayuntamientos observarán las siguientes reglas:

1.º Formarán una sola sección los individuos que contribuyan por razón de cultivo y ganadería, ya sean propietarios ya colonos.

2.º La propiedad urbana formará sección aparte en las poblaciones donde su importancia lo requiera a juicio del Ayuntamiento; en las demás quedará comprendida en la sección anterior.

3.º Las secciones que se formen de los que pague contribución industrial contendrán, con la posible separación, los contribuyentes por razón de comercio, industria fabril, artes y oficios y profesiones.

4.º Los comerciantes, almacenistas y especuladores por mayor formarán secciones independientes de los que se dediquen a la venta por menor de los mismos objetos, agrupando separadamente a unos y otros donde el número de vecinos lo permita, según lo prescrito en la regla anterior.

5.º Igualmente se procurará que las fábricas, artefactos y grandes establecimientos formen secciones separadas de los talleres y establecimientos menores de confección e industria manuales.

6.º En las poblaciones donde los diversos ramos industriales y mercantiles, aunque de escasa importancia, permitan su agrupación, el Ayuntamiento convocará a todos los interesados, y los que de ellos asistan decidirá en votación ordinaria si ha de formarse la sección o se ha de proceder al repartimiento por calles, barrios o parroquias, según previene la regla 5.ª del art. 27 de la ley.

7.º Cuando esto último haya de tener lugar, cuidará el Ayuntamiento de que las secciones queden comprendidas en los barrios municipales que existan, procurando dentro de estos la mayor subdivisión posible.

En ningún caso el número de secciones excederá del total de Concejales que, según la ley, tenga el municipio.

Art. 9.º Los Ayuntamientos reclamarán a las Administraciones económicas los datos necesarios para la formación y división de secciones.

Art. 10.º Formadas las secciones, el Ayuntamiento teniendo presente lo prescrito en el art. 27 de la ley, y especialmente en su base 4.ª, señalará el número de asociados que corresponde a cada sección.

Art. 11.º Ultimada por el Ayuntamiento la formación de secciones y la distribución de asociados, se exponerán las listas al público en la Secretaría del Ayuntamiento, insertándose también en el Boletín oficial cuando se trate de la capital de la provincia. Esto se hará constar uniéndolo al expediente un número del Boletín en que hubiese tenido lugar la publicación, y asimismo por medio de un acta autorizada por el Jefe de paz, su Secretario y tres testigos.

Art. 12.º Las reclamaciones contra la formación de secciones y señalamiento de asociados se alegarán ante el Alcalde en los ocho días siguientes a la publicación de las listas. Al reclamante se le entregará, si lo solicita, un recibo en que conste la fecha y objeto de la reclamación.

Art. 13.º Terminado el plazo de ocho días, se reunirá el Ayuntamiento y decidirá acerca de las reclamaciones interpuestas, comunicando su resolución a cada interesado en el día siguiente al del acuerdo respectivo; si su resolución alterase la formación de secciones o el señalamiento de asociados, se publicará el nuevo acuerdo en la forma prescrita en el art. 11.

Art. 14.º Los interesados, en el término de ocho días, podrán apelar del acuerdo del Ayuntamiento a la Diputación provincial. En igual término podrá también acudir ante la misma cualquier contribuyente que no hubiese reclamado contra la división de secciones y señalamiento de asociados, y se crea perjudicado por la rectificación que autoriza el artículo anterior.

Art. 15.º Terminadas estas operaciones, el Ayuntamiento verificará el sorteo de asociados en la forma que establece el art. 29 de la ley.

En las poblaciones donde por el excesivo número de individuos de cada sec-

ción sea difícil verificar en un solo acto el sorteo de todas, el Ayuntamiento podrá acordar que se lleve a cabo en locales separados, delegando al efecto en los Alcaldes y Regidores las facultades necesarias para presidir y dirigir la operación en cada distrito.

Art. 16.º El resultado del sorteo se anunciará por edictos, comunicándose además por cédula a los elegidos.

Art. 17.º Las excusas y excepciones se alegarán ante el Ayuntamiento dentro de los ocho días siguientes a la publicación de los edictos. La resolución que recaiga se comunicará a los interesados que podrán apelar en otro plazo igual ante la Diputación provincial.

Art. 18.º Los individuos designados por la suerte, en unión con el Ayuntamiento, formarán la Junta municipal durante el respectivo año económico.

CAPITULO III.

Ingresos de los presupuestos municipales y provincial.

Sección primera.

RENTAS Y PRODUCTOS PROCEDENTES DE BIENES, BIENES O CAPITALES.

Art. 19.º En los presupuestos provinciales y municipales se consignará siempre como primer ingreso las rentas y productos a que hace referencia el párrafo primero del art. 2.º de la ley.

En la recaudación e inversión de estos recursos se observará lo prescrito en las disposiciones vigentes relativas a cada ramo.

Art. 20.º Si no fuesen suficientes los ingresos a que se refiere el artículo anterior para cubrir los gastos del Municipio o la provincia, se podrá acudir a los otros ingresos que la ley autoriza.

Llegado este caso, las Diputaciones provinciales harán con la debida anticipación el reparto prevenido en el art. 25 de la ley a fin de que los Ayuntamientos puedan incluir en sus respectivos presupuestos la parte con que han de contribuir a los gastos de la provincia.

Sección segunda.

ARBITRIOS.

Art. 21.º El producto de los arbitrios que autorizan los artículos 4.º y 6.º de la ley formarán parte del presupuesto municipal, y se destinarán inmediatamente a todas las obligaciones del Municipio.

Art. 22.º Los arbitrios relativos a servicios se impondrán únicamente sobre los costeados por los fondos del Municipio.

pin, y no sobre los pertenecientes á em-
presas particulares.

Art. 25. Los arbitrios impuestos sobre los servicios se plantearán por medio de tarifas que determinen el uso y el precio de los actos ó aprovechamientos á que se refieren. De este modo en las aguas se expresará el precio en arriendo de la unidad de medidas que consuma ó utilice cada interesado; en los establecimientos de instrucción el importe de las matrículas ó la cantidad que satisfaga cada alumno; en los mataderos el precio que haya de abonarse por cada cabeza en vivo, y así en los demás casos.

Art. 24. Los arbitrios solo podrán exigirse de las personas que utilicen los servicios á que estén afectos, y no de los demás vecinos.

Art. 25. Solo será obligatorio el uso de aquellos servicios que, como los mataderos, alcantarillado, cementerios, y otros análogos, tengan por objeto la higiene y la salubridad del pueblo.

Art. 26. Los arbitrios de portazgos, pontazgos y barcajes solo podrán imponerse cuando los medios de comunicación por cuyo aprovechamiento se exijan pertenezcan exclusivamente al pueblo ó provincia que los imponga. Esta disposición, sin embargo, no perjudica á los derechos que sobre portazgos, pontazgos y barcajes posean los Ayuntamientos.

Art. 27. Los arbitrios impuestos sobre bebidas fermentadas, sobre cafés, posadas etc. á que se refiere el art. 6.º de la ley se recaudarán expidiendo licencias ó patentes.

Una comisión de contribuyentes por estos conceptos, elegida por aquellos, propondrá las tarifas correspondientes, las cuales aceptará ó modificará el Ayuntamiento. Este designará previamente el número de individuos que han de componer la comisión y el modo y forma de elegirles.

Art. 28. Luego que se establezcan los arbitrios designados en el artículo anterior, no podrá ninguna persona ejercer los actos ni abrir los establecimientos en que aquellos se fundan, sin justificar el pago de la patente ó licencia.

Será obligatorio la exhibición del documento que lo acredite, siempre que se pida por los encargados de ejercer la vigilancia en este ramo.

Los casinos, círculos y otros establecimientos análogos de reunión pública están sujetos á este precepto.

Art. 29. No podrán exigirse arbitrios sobre los establecimientos balnearios en aguas públicas y otros servicios análogos que establezcan los particulares, si bien quedarán siempre sujetos á la inspección general que al Ayuntamiento correspondiere por razón de higiene, policía y ornato.

Art. 30. El establecimiento de la Guardia rural autoriza á los Ayuntamientos para cubrir su coste, ya recargando las cuotas que á los propietarios rurales correspondan en el repartimiento general, ya estableciendo una cuota en su caso en el fondo de reparto. Para fijar las nuevas cuotas en el último caso se oirá á una comisión compuesta de propietarios rurales y elegida por los mismos. El Ayuntamiento designará el número de individuos de que ha de componerse esta comisión y el modo y forma de elegirla.

Art. 31. La facultad que concede la ley de crear arbitrios para establecer la Guardia rural no impide el que los propietarios puedan ascribirse libremente para hacer el mismo servicio, quedando no obstante sujetos en este punto á los reglamentos y ordenanzas del ramo.

Los Ayuntamientos podrán igualmente á la Administración económica de la provincia el papel de matillas é indemnizaciones que conceptúan necesidad para todo el año. Al fin del mismo devolvirá dicha Administración las existencias que resulten sobrantes.

Sección tercera.

REPARTIMIENTO GENERAL.

Art. 52. Los Ayuntamientos distribuirán á todas las personas que, según el art. 11 de la ley, estén sujetas al pago del repartimiento general un estado según el modelo adjunto, en el cual cada interesado, por sí y bajo su responsabilidad, determinará, llenando los huecos, las utilidades imponibles de que por término medio disfrute. Lo mismo en estos estados que en la relación de que habla el art. 29 se expresará la utilidad que haya por los productos anuales, y el valor en venta de los bienes.

Art. 53. Dentro de los ocho días siguientes se recogerán los estados para entregarlos á las secciones de que habla el capítulo 2.º de este reglamento.

Los contribuyentes que no sepan leer ni escribir podrán presentar sus estados de declaración en la Secretaría del Ayuntamiento para que á su presencia, y por las personas que designen, se llenen las casillas correspondientes.

Si algún interesado no concuerde en modo se le reclame, el estado con la declaración correspondiente, ni solicita que se extienda esta á su nombre, la sección, ateniéndose á los datos que posea, fijará por sí la riqueza imponible, quedando el interesado sin derecho en tal caso á reclamar de agravio por este concepto.

Art. 54. Los estados de declaración se pasarán á las secciones, las cuales se convocarán ocho días antes por pregones y edictos, y por anuncios insertos en el Boletín oficial si se trata de la capital de la provincia, expresando el día, hora y sitio de la reunión.

Art. 55. Las secciones, conformándose ó rectificando los estados de declaración, fijarán á cada contribuyente la utilidad imponible, ateniéndose al hacerlo á lo prescrito en el art. 12 de la ley. Formarán asimismo la relación que exige el art. 15 de la misma.

Art. 56. Terminadas estas operaciones, la Municipalidad expone al público por el término de ocho días el resultado de la riqueza imponible.

Cualquier vecino ó residente puede denunciar en este plazo las ocultaciones que se hayan cometido. La ocultación será castigada con una multa equivalente al duplo de la cantidad que resultaría defraudada, cuyo importe se distribuirá por mitad entre el fondo municipal y el denunciador. El denunciador estará obligado á ofrecer las pruebas de la denuncia, sin cuyo requisito no tendrá derecho á la participación en la multa que se imponga al occultador.

Art. 57. Los Ayuntamientos reclamarán á las Administraciones económicas de la provincia una lista que comprenda los nombres de los que en sus casas hayan presentado facturas para cobrar los intereses de los títulos de la Deuda pública y el porte de los intereses abonados.

Estos datos se tendrán en cuenta para la imposición de las respectivas cuotas, á no ser que los interesados justifiquen haber cobrado los intereses de los títulos por cuenta de otra persona. En este caso el Alcalde pasará comunicación al del Ayuntamiento donde resida el propietario de los títulos para que se le incluya en el repartimiento de aquel distrito municipal.

Art. 58. Los Bancos y Sociedades pagarán en proporción á las utilidades que tuvieran justificadas por los balances ó inventarios, pudiendo también servir de base para fijar la cantidad de impuesto el capital social señalado á las mismas.

Las sucursales se considerarán como campañas distintas para los efectos del repartimiento, de tal modo que cada centro contribuya en el punto donde se halle establecido, y solo por el capital con que funciona.

Las Sociedades de explotación de minas, de industrias y artefactos y de fun-

das contribuirán en el punto donde radican sus establecimientos.

Las utilidades procedentes de estas compañías no son imputables á los socios ó accionistas para el pago del repartimiento.

Art. 59. A los hacendados forasteros sin casa abierta se dará conocimiento de las cuotas que les correspondan por medio del Alcalde del punto donde residan, entregándose además, un duplicado á sus colonos ó arrendatarios.

Para cobrar las cuotas cuando los hacendados no tengan casa abierta en la localidad se acudirán á los administradores ó apoderados, y en su defecto á los colonos ó arrendatarios, reservándose á estos el derecho de reclamar á los propietarios el importe ó deducirlo al hacerles el pago de la renta. Si el colono no se prestase á satisfacer la cuota con estas condiciones, podrá el Ayuntamiento proceder contra la finca.

Art. 60. Para la aplicación de la base 5.ª, art. 12 de la ley, se fijan las siguientes escalas:

| | |
|--|-----|
| Tarifa n.º 1.ª, clase 1.ª de 16 á 20 veces la cuota. | |
| 2.ª de 12 á 16 id. | id. |
| 3.ª de 11 á 15 id. | id. |
| 4.ª de 10 á 14 id. | id. |
| 5.ª de 8 á 12 id. | id. |
| 6.ª de 6 á 10 id. | id. |
| 7.ª de 5 á 9 id. | id. |
| 8.ª de 4 á 8 id. | id. |
| Tarifas núms. 2.ª y 3.ª de 16 á 20 id. | id. |

Excepcionanse los Bancos y Sociedades, que pagarán con sujeción á lo prescrito en este reglamento.

Tarifa especial de profesiones del orden civil.

| | |
|--|-----|
| Madrid..... de 17 á 20 veces la cuota. | |
| Poblaciones de 1.ª clase 16 á 19 id. | id. |
| 2.ª id. 15 á 18 id. | id. |
| 3.ª id. 14 á 17 id. | id. |
| 4.ª id. 13 á 16 id. | id. |
| 5.ª id. 12 á 15 id. | id. |
| 6.ª id. 11 á 14 id. | id. |
| 7.ª id. 10 á 13 id. | id. |
| 8.ª id. 9 á 12 id. | id. |

Del orden judicial.

| | |
|--|-----|
| Madrid..... de 16 á 20 veces la cuota. | |
| 1.ª clase. Audiencias..... 12 á 18 id. | id. |
| 2.ª id. Jueces..... 10 á 16 id. | id. |
| 3.ª id. Jueces de 1.ª instancia..... 10 á 16 id. | id. |
| 4.ª id. Jueces de 2.ª instancia..... 10 á 16 id. | id. |

| | |
|--|-----|
| En las demás poblaciones..... 8 á 12 id. | id. |
| En base de población..... 8 á 16 id. | id. |
| De patentes..... 5 á 10 id. | id. |

Las Juntas de Ayuntamientos aplicarán las escalas anteriores dentro de los límites señalados, según las circunstancias especiales de cada localidad, industria y contribuyente.

Están exentos del pago de este repartimiento:

1.º Los Abogados y Procuradores que, en virtud de nombramiento especial de oficio, entiendan por turno en los asuntos civiles de pobres y en las causas criminales; pero sin que esta exención exceda respecto de los Abogados.

En Madrid de 10.
En Barcelona, Granada, Sevilla y Valencia de 60.

En la Coruña, Valladolid y Zaragoza de 40.

En Burgos de 30.

En Alhacete de 20.

En Cáceres y Mallorca de 15.

Y en Oviedo y Santa Cruz de Tenerife de 10.

En cuanto á los Procuradores, no excederá el número de las exenciones de la tercera parte respectivamente fijada á los Abogados.

En el máximo de exención, concedido en el párrafo anterior, se comprenden los Abogados y Procuradores que entiendan en los pleitos y causas de los Tribunales superiores y de los Juzgados de primera instancia existentes en las poblaciones mencionadas.

Los Regentes de las Audiencias en darán de que todos los años se remitan á la Administración económica listas de los Abogados y Procuradores á quienes alcance la exención.

En cada Juzgado de primera instancia de poblaciones donde no existan Audiencias territoriales se consideran exentos dos Abogados y un Procurador.

También se consideran exentos:

En las Audiencias de Madrid, Barcelona, Coruña, Granada, Sevilla, Valladolid y Zaragoza dos Relatores y dos Escribanos de Cámara; y en las Audiencias de Alhacete, Burgos, Cáceres, Santa Cruz de Tenerife, Mallorca y Oviedo un Relator y un Escribano de Cámara.

En los Juzgados de primera instancia donde no haya Escribanos dedicados exclusivamente al despacho de causas criminales, sino que estas se despachen indistintamente por todos ellos, alcanzará la exención á un solo Escribano en cada Juzgado.

Si en estos no hubiese mas que un Escribano que intervenga en las causas criminales, se les rebajará una cuarta parte de la cuota.

2.º Los cosecheros de vino y aceite, y los propietarios y labradores de los demás frutos de la tierra por las ventas que hagan al por mayor en los depósitos establecidos en el punto de producción, y también por las que verifiquen en las plazas ó mercados de los pueblos inmediatos á que lleven sus cosechas; pero quedando sujetos al impuesto si las ventas las ejercitan en almacén ó establecimiento permanente fuera del punto de producción.

Los mismos cosecheros, propietarios y labradores por las ventas que hagan al por menor en un solo local de los edificios en que tengan constituidos los depósitos de sus cosechas.

Cuando estos depósitos sean de cosechas de vino y aceite, y se hallen en despoblado, por cuya causa no pueda hacerse en ellos la venta al por menor á que se refiere el párrafo precedente, disfrutará de exención el local abierto al público dentro de la población para dicho objeto, siempre que no tenga otro para la venta al por mayor.

3.º Los criadores de ganado de todas clases, considerándose como tales los que en número proporcionado tengan reses de vientre, y no los que compran para engordar ó beneficiar.

4.º Los labradores por los demás ganados por que paguen la contribución territorial, siempre que consten detalladamente en los amillaramientos ó en los datos estadísticos en que se funda el impuesto.

5.º Los cosecheros de vino que queman solamente el orujo ó 52 litros (2 arrobas) de vino de su propia cosecha para la fabricación del aguardiente.

6.º Los propietarios de montes por el beneficio y carbones de las leñas y maderas de construcción de los montes que les pertenezcan, siempre que las vendan dentro del término municipal de la producción.

Cuando el territorio en que se hallen enclavados los montes carezca de vías de comunicación se ampliará la exención; y previo el oportuno expediente, instruido en la Administración económica de la provincia y consultado á la Dirección general de Contribuciones, se concederá permiso al dueño ó dueños para llevar las maderas ó las leñas á otro mercado, siempre que lo verifiquen los mismos dueños.

7.º Los establecimientos de enseñanza costeados por el Estado ó por los fondos comunes de las provincias ó pueblos y por fundaciones piadosas.

8.º Los hospitales, casas de Beneficencia y demás establecimientos piadosos por las corridas de toros, novillos, bailes de máscara y otros espectáculos públicos; pero sin alcanzar la exención á cualquiera empresario con quien di-

chos establecimientos contrahen arrien-

9. Las Sociedades de seguros mú-
tuos cuyas operaciones se refieren á
repartir entre los suscritores el equiva-
lente de los daños sufridos por una parte
de ellos sin opción á beneficios.

10. Las Cajas de Ahorros y Montes
de piedad establecidos con real aproba-
ción, cuyos capitales y acumulación de
beneficios se emplean exclusivamente en
préstamos sobre alhajas y otros efectos.
Pero si dichos establecimientos son por
acciones entre las cuales se reparten los
beneficios, ó se emplean los capitales en
otros objetos de especulación, serán con-
siderados como Sociedades anónimas, y
pagarán como tales Sociedades según
previene este reglamento.

11. Los carros y carreolas de bueyes
destinados á usos de agricultura, siem-
pre que se limiten al acarreo de mieses
ó de cosechas propias.

12. Y por último, las industrias, pro-
fesiones, artes y oficios que se ejerzan
dentro de las plazas de Ceuta, Alhuce-
mas, Melilla, Peñón de la Güicera y
Chafarinas.

Art. 41. La Junta municipal, tenien-
do en cuenta lo prescrito en el art. 13
de la ley, resolverá las reclamaciones
que se hubieren presentado, y fijará la
cantidad que cada sección debe pagar,
teniendo en cuenta para ello las utilida-
des valuadas de todos sus individuos y la
suma total repartible (Art. 14 de la ley).

Art. 42. Los síndicos de cada sec-
ción fijarán la cantidad que á cada con-
tribuyente corresponda (Art. 15 de la
ley), exponiendo al público el resultado
por el término de ocho días, en los cua-
les podrán los interesados apelar al Ayun-
tamiento.

Art. 43. Los gastos generales que
origine la formación del repartimiento
se abonarán de los fondos del Municipio.
Los causados á instancia de parte lo se-
rán según lo prescrito en el cap. III de
este reglamento.

Sección cuarta.

CONSUMOS.

Art. 44. Solo en los casos previstos
en el párrafo cuarto del art. 2.º de la
ley podrá acordarse el establecimiento
de los consumos. Este acuerdo se adop-
tará por la Junta municipal en sesión
pública.

Art. 45. La Junta municipal, al
adoptar el expresado acuerdo, designará
también los artículos que hayan de ser
objeto del impuesto; fijará las tarifas, y
determinará la forma ó formas de per-
cepción, cuidando particularmente de
que, conforme á lo dispuesto en el arti-
culo 21 de la ley, no se perjudique por
tal concepto al tráfico ni se ponga obstá-
culo á la libre circulación.

Art. 46. El Ayuntamiento remitirá
al Gobierno 15 días antes de aquel en
que debe empezar á regir el acuerdo á
que se refieren los dos artículos anterio-
res copia literal del mismo, expresando
la fecha en que ha de empezar á cobrar-
se el impuesto y los precios medios que
habrán de servir para la formación de
las tarifas, lo cual se hará constar por
certificación de los precios corrientes en
el mercado en cada trimestre del año
anterior.

Art. 47. Cuando el Gobernador con-
sidere infringida la ley por el acuerdo,
lo pondrá inmediatamente en conoci-
miento del Gobierno á fin de que pueda
con efecto la interpretación ordenada por
el párrafo quinto del art. 99 de la Con-
stitución.

Art. 48. Las reclamaciones de los
particulares acerca de la ilegalidad de
los acuerdos se presentarán al Goberna-
dor á fin de que si lo cree oportuno pro-
ceda según previene el artículo anterior.

Art. 49. Si la Junta municipal acor-
dare exigir el impuesto de consumos por
encabezamiento con los fabricantes, co-
sacheros ó expendores, quedarán, no

obstante, sujetos al pago según las tari-
fas señaladas los mercaderes ambulantes
y tragineros. Quedarán asimismo sujetos
á él los particulares por las especies que
introduzcan en el pueblo para su consu-
mo. Esto se entenderá sin perjuicio de
lo dispuesto en el art. 21 de la ley.

Art. 50. Determinada la forma en
que ha de exigirse el impuesto de con-
sumos, corresponde al Ayuntamiento
dictar las instrucciones necesarias para
su aplicación. De estas instrucciones se
pasará copia autorizada al Gobernador
de la provincia 15 días antes de que em-
piecen á regir.

CAPÍTULO IV.

Recursos contra los acuerdos de los Ayun- tamientos y Juntas municipales.

Art. 51. Los recursos de agravios ó
apelaciones que los particulares inter-
pongan en virtud de lo prescrito en los
artículos 17, 22, 28, 31 y 35, se presen-
tarán ante el Alcalde, que los remitirá á
la Diputación provincial en el preciso
término de ocho días, informados pré-
viamente por la Junta ó los síndicos,
según el caso, los cuales expresarán con
toda puntualidad la exactitud ó inexacti-
tud de los hechos en que se apoya la
reclamación.

Art. 52. La Diputación provincial
resolverá de plano la reclamación si por
las manifestaciones del interesado y los
informes de la Junta ó los síndicos pue-
de apreciar cumplidamente la justicia
de aquella; en otro caso mandará prac-
ticar las diligencias que crea oportunas.
Las que hayan de tener lugar en el pue-
blo mismo serán sometidas al Jefe de
paz. La exhibición de documentos ten-
drá lugar ante la Diputación provincial.

Art. 53. Terminadas las pruebas y
comunicadas á los interesados, la Dipu-
tación en vista pública, en la cual po-
drán los reclamantes hacer las observa-
ciones que crea oportunas, resolverá
definitivamente confirmando, revocando
ó modificando el acuerdo apelado.

La decisión deberá dictarse dentro de
un mes, á contar desde la fecha en que
la reclamación se hubiere recibido en la
Diputación provincial.

Art. 54. Los gastos que se causen en
virtud de las reclamaciones que la ley
autoriza se abonarán, en todo ó en par-
te, de los fondos municipales si se revo-
ca el acuerdo apelado; por los particula-
res si se desestima la reclamación, y por
los síndicos y Concejales si revocado el
acuerdo se declara á los mismos respon-
sables de tal abono.

La Diputación provincial, al resolver
las reclamaciones, expresará quien debe
satisfacer tales gastos.

ARTÍCULOS ADICIONALES.

Artículo 1.º Sin perjuicio de lo pres-
crito en la disposición transitoria de la
ley, los Ayuntamientos establecerán y
regularizarán su situación económica
conforme á lo dispuesto en la misma y
en el presente reglamento, debiendo ve-
rificarlo desde el 1.º de julio próximo.

Art. 2.º Para conseguir esto los Ayun-
tamientos procederán desde luego á las
operaciones preliminares que las citadas
disposiciones exigen, y á la determina-
ción de los recursos que deban figurar
en el presupuesto del próximo año eco-
nómico.

Art. 3.º En cumplimiento de lo pres-
crito en la primera de las disposiciones
transitorias de la ley, los Ayuntamientos
que se hallen solventes en el pago de
los cupos del impuesto personal, tanto
por los tres trimestres del año económico
de 1868-69, como por los del actual
ejercicio, dispondrán desde luego de los
recargos municipales sobre las contribu-
ciones territorial é industrial.

Respecto de las Municipalidades que
no hayan llegado á cubrir en todo ó en
parte el impuesto, procederá la Adminis-
tración económica á compensar lo que
por este concepto debieran.

1.º Con el importe de los intereses
que deban percibir las Municipalidades
de las inscripciones intrasferibles, y de
los bonos del Tesoro que posean ó á que
tengan derecho.

2.º Con los recargos municipales de
las contribuciones territorial é industrial.

3.º Con los bonos del Tesoro que al
Ayuntamiento correspondan si los dos
conceptos indicados no bastasen á pro-
ducir la compensación.

Una ley especial fijará el modo de repa-
rar los Ayuntamientos el importe de los
bonos enajenados por este concepto.

Art. 4.º Si después de ejecutada di-
cha compensación resultasen todavía dé-
bitos á favor del Tesoro por el impuesto
personal, serán satisfechos por los Ayun-
tamientos con el producto de los arbi-

trios ó medios que se establezcan en la
forma prevenida en la ley.

Art. 5.º Por el Ministerio de Hacie-
da se dictarán las disposiciones neces-
arias para que las dependencias de la Ad-
ministración económica entreguen el im-
porte de los recargos á los Ayuntamien-
tos que se hallen en el caso previsto por
el párrafo primero del art. 3.º de los
adicionales, y también para que se ve-
rifique la compensación ordenada en las
disposiciones anteriores.

El mismo departamento cuidará de
que las Administraciones económicas fa-
ciliten á los Ayuntamientos los datos que
en este reglamento se mencionan.

Madrid 20 de abril de 1870.—El Mi-
nistro de la Gobernación, Nicolás María
Rivero.

Aprobado por S. A.—Rivero.

Modelo del estado á que se refiere el art. 32.

| CONTRIB. | PROFESION. | Renta ó utilidad anual | Cantidades que satisface por contri- bucion del Estado. | OBSER- VACIONES. | Utilidad imponi- ble. | Cuota que deben pagar. |
|----------|--|--|---|---------------------|---|--|
| | Bracero, chero, em- pleado, in- dustrial, co- lono, Méli- co, Aboga- do etc. (1) | Por bienes in- muebles. Idem id. mue- bles. Idem capital Id. semovien- tes. Id. productos de su industria. Profesion (2). | Por contri- bucion terri- torial. Id. indus- tria. Idem des- cuento como empleado. | | Esta ca- silla se lle- nará por los resú- menes de la Junta municipal | Esta co- ta se lle- nará por la sección, menes de la Junta municipal |

(1) El que tenga más de una profesión lo expresará así.

(2) El que tenga más de un origen de renta lo expresará igualmente.

Circular.

Al publicar el reglamento para la apli-
cación de la ley de 23 de febrero último
sobre ingresos municipales y provincia-
les, cumplíame dirigir á V. S. las instruc-
ciones necesarias á fin de que, compren-
diendo con toda exactitud el espíritu de
esta importante y trascendental reforma
económica, procure allanar cualquier obs-
táculo que á su planteamiento se ofrezca.

La nueva ley, inspirada en el art. 99
de la Constitución vigente, á la vez que
reconoce la autonomía de los pueblos y
provincias en cuanto se refiere á los in-
gresos de sus presupuestos, determina la
manera y el carácter con que V. S. debe
intervenir en tales asuntos á fin de que
el Gobierno pueda, en caso necesario,
adoptar ó proponer á las Cortes las me-
didas necesarias para evitar que las Cor-
poraciones locales traspasen el círculo
de sus atribuciones en perjuicio de los
intereses generales y permanentes del
país.

El primer deber de V. S. en este punto
es respetar la integridad de las facultades
reconocidas á las Diputaciones y Ayunta-
mientos, y al propio tiempo vigilar la
exacta y puntual observancia de la ley
por los medios que ella misma determi-
na y por los que establecen las de orga-
nización municipal y provincial. Al efec-
to cuidará V. S. muy especialmente de
que los Ayuntamientos le comuniquen,

según está prevenido, todas las disposi-
ciones que adopten en lo relativo al im-
puesto de consumos, remitiéndole copia,
así de los acuerdos tomados para estable-
cerlo, como de las instrucciones dictadas
para percibirlo.

Tanto en estos casos, como en aque-
llos en que los particulares entablen al-
guna reclamación sobre esta materia,
examinará V. S. con sumo esmero si los
Ayuntamientos, al fijar la forma en que
deba cobrarse tal impuesto, han observa-
do lo prescrito en el art. 21 de la ley;
si han gravado artículos de los exceptua-
dos, y si las circunstancias del Municipio
autorizan el establecimiento de un im-
puesto que sola han admitido las Cortes
Constituyentes como suplenio y siempre
transitorio recurso.

En el caso de observar V. S. alguna
ilegalidad, dará inmediatamente cuenta
al Gobierno á fin de que se adopten las
medidas oportunas.

Pero no es esta la única función que
en tal materia corresponde á la Autori-
dad. A ella compete también allanar los
obstáculos que embarazan la libre inicia-
tiva de las corporaciones populares, y ex-
citarlas asimismo á que regularicen su
situación económica. Por este concepto
debe V. S., en primer término, cuidar
de que la Diputación provincial fije el
presupuesto que ha de regir en el próxi-
mo año económico y señale á cada pue-

to la cantidad con que la de contribuciones de la provincia. Igualmente que los Ayuntamientos ejercen las operaciones preliminares del presupuesto formando las secciones distribuyendo los presupuestos, constituyendo la Junta municipal y fijando por último los ingresos que deben cubrir sus atenciones en el inmediato año económico. V. S. procura a todo trance que desde 1.º de julio próximo quede regularizada la situación económica de los pueblos y provincias, evitando el conflicto que origina la incertidumbre de la existencia de aquellos prolongase el proceso estándole que se hallan a pasar de tener medios ligeros para mejorarlo.

A V. S., como inmediato representante del Gobierno en esta provincia, le resguardo procurar que se entre en una marcha libre y desembarazada, ayudando a plantear el nuevo sistema, tratando de comprender su espíritu, excitando la actividad de las Corporaciones locales, y procurando vencer toda dificultad que se presente hasta conseguir la definitiva aplicación de la reforma. Si V. S. halla se deficiente su Autoridad, de esta manera, al Gobierno, si cual ya teniendo por sí, ya prestando a las Corporaciones las oportunas medidas legales para que cesar toda clase de inconvenientes.

Al cumplir las anteriores prescripciones debe considerar V. S. que en este momento se necesita extraordinaria actividad por parte de la Autoridad para seguir el patriótico fin que el Gobierno se propone. Cuando de la tutela oficial que se gal a la iniciativa de las Corporaciones locales se ha pasado a un régimen del todo distinto, es posible que no se comprenda el nuevo sistema en todo su pureza, y que los precedentes históricos extravíen la acción de las Corporaciones populares, exigiendo una inspección mayor por parte del Estado. Pero tal situación ha de ser transitoria; de día en día, las Corporaciones locales han de comprender el medio de emplear sus facultades, de regularizar su situación, y de situar en un período normal, quedando la inspección del Gobierno como suprema garantía a que, solo por excepción, será preciso recurrir.

Estas indicaciones bastan a determinar el carácter con que V. S. debe intervenir en los graves asuntos para responder, con arreglo a la ley, las obligaciones que a su jurisdicción se propongan para evitar cualquier conflicto que pudiera nacer de su mala interpretación. Esfuércese V. S. por convencer a las Corporaciones populares de que el acuerdo regimien económico, establecido por la nueva ley, es la sólida base sobre que ha de asentarse la libre acción de Ayuntamientos, y limitaciones en la gestión de sus propios intereses. Demuéstreles, en fin, que solo aplicando estos principios puede fundarse la legítima y provechosa descentralización administrativa que la Constitución consigna en sus preceptos, que la voluntad de las Cortes va a establecer en las leyes orgánicas, y que es el objeto a que se encaminan los constantes esfuerzos del Gobierno.

Madrid 20 de abril de 1870.—Rivad. Sr. Gobernador de la provincia de...

GOBIERNO DE PROVINCIA

Ante la vacante de la plaza de Car... de Baños de Molgas. Comunicaciones.—Personal de Correos. Negociado. Por fallecimiento del que la obten...

ha re-... para la plaza de Car... de Baños de Molgas confirmo a lo dispuesto en decreto de 28 de octubre del año último y circular de la Dirección general de Comunicaciones de 29 de noviembre siguiente. Por lo tanto, los que se consideren con aptitud, méritos y servicios bastantes, presentarán al Jefe de Comunicaciones en esta capital dentro del término de un mes, contado desde la publicación de este anuncio, solicitudes documentadas que justifiquen tales circunstancias, cuales son ser mayor de 16 años y menor de 60, saber leer, escribir y ser de buena conducta; cuyos estrómos se acreditarán con la partida de bautismo fehaciente, y certificaciones del Alcalde y Juez de paz del pueblo de su naturalidad, además de otra que obtendrán del encargado de la estafeta que dependa el servicio, que con firme además de las circunstancias dichas que le considera física y moralmente apto para el desempeño del servicio, teniendo presente que en igualdad de circunstancias serán preferidos para el mismo entre los aspirantes, los licenciados del ejército de mar y tierra y de la Guardia civil con buenas notas.

Orense abril 25 de 1870.—El Gobernador, José Casal.

ADMINISTRACION ECONOMICA DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

La Dirección general de Contribuciones en orden fecha 12 del actual, mandando, que una errata material en la edición oficial del Reglamento y tarifa que ha de regir para la contribución industrial desde el próximo ejercicio, ha sido la causa de señalarse la cuota de 62 pesetas al número 14 de la tarifa 3.ª, primer concepto de fabricación de cartuchos en lugar de 62 céntimos de peseta que es la cuota que debe satisfacer cada uno de los pagos que dicho número se refiere, como se aparece en la Gaceta de 1.º del corriente. De la misma manera dicho Centro directivo con fecha del 24, también ha presente que una equivocación material se ha cometido en el rubro de graduación de los tres guarismos que componen la primera cuota del número 16 de la Tarifa 3.ª, referente a fabricas de paño para sopa y sémola, ha sido causa de haberse señalado 13 pesetas en las capitales de provincia de primera clase, debiendo ser 13 que es la cantidad que corresponde en la graduación de las que establece dicho concepto.

Lo que se anuncia por medio de este periódico oficial para conocimiento del público y como rectificación a dicha edición oficial del expresado Reglamento inserto en aquel.

Orense 26 de abril de 1870.—Francisco Criado Perez.

Al insertarse la circular de la Junta de la Venta pública de 16 del actual, en el Boletín oficial de 26 del mismo número 30, se consignó en el segundo párrafo renglón doce de aquella por un error material de imprenta; la palabra quedando a sí reducida en la renta; debiendo haber sido reducida quedando a sí refundida en la renta; y en este concepto se hace la correspondiente rectificación para conocimiento del público.

Ayuntamiento del Barrio de Baños de Molgas.
Por medio del presente se cita a los señores Agustín y Otero Fernandez, hijo de Agustín y de Alejandra, arrendador de la parroquia de A. Torres, núm. 23, para la presente quinta, 3.ª del m.º José María Silva Ferrero, hijo de Domingo y de Julia, arrendador de la parroquia de Aurea, núm. 62, los cuales no se presentaron a ser llamados ni excepcionar con alguna de las del preciso término de ochodías comparecerán en la casa de este Ayuntamiento, tanto para ser llamados, cuanto para excepcionar lo que creen convenientes y de así no hacerlo, les parará el perjuicio consiguiente.

Baños abril 19 de 1870.—El alcalde, Pascual Taboada.

PROVIDENCIAS JUDICIALES.

D. José María Alonso, secretario del juzgado de paz de Rairiz de Veiga.

Certifico que en este juzgado se ha dado juicio verbal Damaso Ferrero, labrador y vecino de Zipeaus, contra D. Nicolás Losada, ambos en este distrito, se dictó la sentencia del tenor siguiente:

En la audiencia del juzgado de paz de Rairiz de Veiga a 23 de marzo de 1870, el Sr. D. Manuel Rodríguez, juez de paz del mismo, habiendo visto el juicio que antecede entre Damaso Ferrero, labrador y vecino de Zipeaus, con D. Nicolás Losada, propietario y vecino de Zipeaus, sobre reclamación de 50 pesetas, por arrendamiento de un terreno, resultando que el demandado D. Nicolás no compareció el día de la audiencia, a pesar de su deber comparecer, y oposición del demandante se declaró en rebeldía.

Resultando que la parte autorizada prueba por medio de dos documentos solemnemente otorgados en esta ciudad que dicha cantidad se la ha consignado Ignacio Miguel, vecino de Penelas, en mano del Sr. Xa... y en el otro que es cierto que debe cantidad mayor de dicho D. Nicolás a la Misal.

Considerando que vistos los documentos es cierta la reclamación la que se debe solventar por lo tanto, Ratifico y condeno y debe de condenar al D. Nicolás al pago de los 56 escudos con los céntimos, por esta así juzgando en primera instancia, que se notifique con fuerza de derecho así lo determina y firmo de que certifico.—Manuel Rodríguez.—José María Alonso, secretario.

A fin de que se cumpla lo que en la misma se previene respecto a la notificación de esta sentencia, libro la presente que tiene prelo el visto bueno del señor Juez estando en Rairiz a 8 de abril de 1870.—José María Alonso, Srio.—Manuel Rodríguez.

D. José María Alonso, secretario del juzgado de paz de Rairiz de Veiga. Certifico que en el juicio verbal pendiente en este juzgado, entre paries, Antón Gómez demandante...

... demandado recayó la siguiente sentencia: En la audiencia del juzgado de paz de Rairiz a 7 de abril de 1870, el Sr. D. Manuel Rodríguez García, juez de paz del mismo, vistos los precedentes autos, y...

Resultando que Antonio Gómez, de este distrito demandado en juicio verbal a Manuel Priedo, vecino de la Puente de la Pazo de Ambia, en la alcaidía de Baños de Molgas, para que le pague los autos de 50 escudos, probados de una vez que le vendió...

Resultando que el demandado fue citado en virtud de oficio, y que no compareció en este juzgado en que se siguió el juicio en rebeldía, recibiendo la prueba testifical que el demandante suministró.

Considerando que Antón Gómez sin excepción y conformes sobre un mismo hecho hacen prueba plena, y que las declaraciones por ellos prestadas en este juicio son ciertas y terminantes.

Considerando que tanto comparecencia del demandado sin causa conocida, hace presumir legalmente que la demanda es fundada, que no obstante la demanda justificada por el autor, la que debe de condenar y condena en rebeldía a Manuel Priedo al pago de los 50 escudos con los céntimos.

Al por esta que se notifique en el juzgado de paz de Rairiz de Veiga, a los señores D. Manuel Rodríguez, secretario del juzgado de paz de Rairiz de Veiga, y D. José María Alonso, secretario.

Correspondencia de la Tarifa con el original a que me remito. Y para que se inserte en el Boletín oficial de la provincia, según previene la ley, libro la presente con el visto bueno del señor Juez en Rairiz a 9 de abril de 1870.—José María Alonso, Srio.—Manuel Rodríguez.

ARRESTO POPULAR DE MADRID.

De los patos, requitidos en el día de hoy por la intervención del mercado de granos y hortalizas de apicultores de consumo, resulta lo siguiente: el 2.º arroba de artículos al por mayor y menor. Carne de vaca, de 5.100 a 5.800 escudos arroba, y de 0.212 a 0.216 escudos libra. Id. de cerdo, de 0.212 a 0.216 escudos libra. Id. de ternera, de 0.400 a 0.500 escudos libra. Tocino ahumado, de 8.300 a 8.400 escudos arroba, y de 0.331 a 0.334 escudos libra.

Idem fresco, de 0.312 a 0.350 escudos libra. Jamón, de 0.500 a 0.600 escudos libra. Vino, de 1.600 a 2.800 escudos arroba, y de 0.048 a 0.118 escudos cuartillo. Pan de dos libras, de 0.118 a 0.144 escudos.

Arroz, de 2.600 a 2.800 escudos arroba, y de 0.118 a 0.132 escudos libra. Lo que se anuncia al público para su inteligencia. Madrid 26 de abril de 1870.—El Alcalde primero, Manuel María José de Gallo.

IMPRESA DE D. FRANCISCO FAL...